

El sujeto político como estado moderno

Nerva Bordas de Rojas Paz

I. Planteo general

Retomar el hilo de la historia para conducir lo humano hacia un destino de libertad. Utópica e indestructible consigna que encierra un impulso cierto no renunciabile: la búsqueda de la felicidad. Insistente y paradigmática, eterna tarea que el hombre desarrolla desde el comienzo de los tiempos, con éxitos y fracasos, marchas y contramarchas, avances y retrocesos, como un mandato vocacional que se le impone e impera en él categóricamente. Inconcebible como hacer exclusivamente individual, requiere la obra colectiva que exige aunar esfuerzos para concretar un objetivo a partir de acciones de conjunto. Aparece entonces la demanda de un Sujeto Político con sentido de Polis. A él se llega cuando la estructuración social interna concreta un enlace que, en términos de poder, permite a una multiplicidad devenir Uno. No el Uno impersonal del "se" sino el que lleva sobre sí la conformación de la identidad grupal. En ese Uno la experiencia plural se singulariza y adquiere la densidad del sujeto colectivo que ha devenido sujeto político. Este, en su configuración actual moderna, lleva un estigma profundo: la imposibilidad de ejercer el poder desde el reconocimiento recíproco de la acción que construye en común. Desconocida la participación real de sus integrantes, reconociendo ámbitos de realización parciales por abstractos, resulta afectado por una crisis estructural que provoca el desencuentro de la relación individuo-comunidad y, dentro de esta última, la disociación entre sociedad y Estado. Lleva otro efecto negativo: la confusión de la línea divisoria entre Estado y formas de gobierno. Es necesario recabar los fundamentos de lo político para determinar qué tipo de Estado es el que asume la conducción del sujeto político, a través de tal o cual forma de gobierno. De ese modo, por ejemplo, la democracia es presentada como forma de gobierno de un Estado sin analizar previamente el concepto de Estado. Se acepta de hecho que es la democracia la que se inserta en éste último. Nuestra pregunta implica revertir el sentido.

El Estado Moderno es concebido como la organización propia y lograda de los sujetos colectivos que se institucionalizan sin advertir que, por su fundamento, ese tipo de Estado resulta inconciliable con una democracia genuina. El Estado es presentado como condición de posibilidad de la democracia. Nos parece necesario invertir los términos: la democracia, como sujeto político sustancial, como forma de Estado, debe dar sentido y ser condición de posibilidad de éste. No se trata de una disquisición académica: la prioridad en el orden del ser implica concebir un Estado al servicio de la democracia a fin de que resulte ejecutor de sus mandatos, en lugar de conductor coactivo, desligado y abstraído del sujeto político real. Llamamos la atención sobre este hecho que tiene carácter decisivo para consolidar una comunidad como sujeto político democrático. La cuestión evidencia la necesidad de una reformulación integral de lo político profundizando la noción y fundamentación del Estado.

En este sentido, aunque en otro contexto, Germán J. Bidart Campos al responder a la pregunta qué es la democracia dice "La democracia es una forma de organización política o 'forma de estado' (no 'forma de gobierno') que conecta al elemento poder con el elemento humano del Estado." ("La justificación de la democracia" en *En torno a la democracia*, Rubinzal Culzoni, p. 19.) Nos interesa destacar en este autor su paréntesis: "no forma de gobierno". Coincidente con lo que acabamos de señalar, la democracia es una organización política o una forma de Estado. Al serlo se identifica y es el Estado mismo organizado políticamente. Damos a la democracia el carácter de sujeto político sustancial y no mera forma donde el Pueblo es sustraído del mundo de las decisiones.

Bobbio caracteriza la democracia (*El futuro de la democracia*, FCE, 1986, p. 14) como "un conjunto de reglas (ordinarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimiento..." En estos términos nos deja sin saber algo decisivo para nuestro concepto de democracia: quién es el sujeto que establece las reglas y con qué legitimidad lo hace. Es insuficiente decir que una democracia es un conjunto de reglas; hace falta determinar quién las establece y cómo. La afirmación nace como consecuencia

de un manejo abstracto y normativista del poder político. Antes que los hombres son destacadas las normas que aseguren su ejercicio. También aquí proponemos un sentido inverso: las reglas democráticas nacen de los pueblos con prioridad a las autoridades desentendidas de ellos; éstas sólo deben ejecutarlas. El modo de la participación y creación determina que tales reglas sean consideradas como propias o como objetivación autoritaria. Abordar la cuestión tiene una significación clave para el concepto de lo político y la legitimación del poder. La política de nuestro tiempo debe conducirnos hacia sistemas que impliquen participaciones concretas superando todo pluralismo abstracto propio de un régimen formal. Damos al término democracia su significación etimológica primaria de la que Grecia hizo gala: gobierno del pueblo. Importa no sólo el número de participantes sino también quien la integra y el modo y el grado de la participación. Una participación abstracta es negación participativa; los pueblos la viven como simulacro.

Esta idea de simulacro está presente cuando se califica como democracias a Estados que sólo la declaran formalmente; o cuando se dice a un Estado que es democrático por el solo hecho de que el individuo concurra a las urnas cumpliendo un trámite burocrático formal; o cuando un gobierno es elegido por votos no obligatorios que representan sólo un porcentaje mínimo de la población. Los condicionamientos por la presión del juicio colectivo, las próximas elecciones, la voluntad casi irrefrenable de perpetuarse en el poder o el debate preeleccionario, nos parecen insuficientes para sostener que con ellos haya control político participativo; operan como manifestaciones del simulacro.

Unos conceptos del profesor R. Maliandi en su artículo "Justificación de la democracia" (*En torno a la Democracia*, Rubinzal Culzoni 1990, p.53) en la dirección que venimos expresando, circunstancian con mayor exigencia el carácter de una democracia. Añaden al concepto político requerimientos éticos: "En sentido estricto, por ejemplo, no puede haber democracia si hay niñez abandonada" o "no puede llamarse 'democrático' a ningún Estado que ejerza el colonialismo o el imperialismo cualquiera sea su signo ideológico".

Ligamos nuestro concepto inicial de sujeto político sustancial con la idea de democracia entendida como pueblo organizado sustancialmente en el orden del ser, ejerciendo el poder decisorio de modo real.

Afirmamos la *TESIS* que concibe al Estado Moderno asumiéndose autoritariamente como sujeto político, y tomando sobre sí el monopolio del poder coactivo. Lo hace a partir del desapoderamiento de la libertad política individual y del sujeto colectivo, que canaliza a través del ejercicio del poder político como "juego astuto".

Sostenemos que la *CRISIS* se produce por insatisfacción de la vocación política de los ciudadanos, a la que asignamos carácter ontológico irrenunciable. Ésta resulta limitada en su expresión al circunscribirse a la emisión de un voto no vinculante o a la participación en el "juego astuto" de la política.

Señalamos que nuestro *OBJETIVO* quiere indagar las posibilidades que se abren para que el sujeto político que hoy actúa como Estado coactivo pase a ser sujeto político como Estado ético. Para ello es necesario recuperar las libertades ficticiamente suprimidas y con ellas la facultad decisoria real de individuos y sociedad. Se alcanza de ese modo una democracia participativa, que se expresa a sí misma en concordancia con su ethos cultural y sobre la base de una justicia practicable y enseñable instalada como hábito.

Desarrollar nuestra *TESIS*, la situación de *CRISIS* y el *OBJETIVO* propuesto requiere desmembrar en sus elementos y fundamentación el Estado Moderno para advertir sus fallas y delimitar un modo de superación adecuándolo a las demandas actuales.

El Estado moderno ampara su misión directriz en la fuerza de un derecho coactivo y se desprende de toda consideración ética. En tales condiciones se produce la institucionalización política de los sujetos colectivos, escindiéndolos internamente. Queda por un lado conformada la sociedad y por el otro el Estado

en términos de oposición. Se convierte de ese modo por un consenso ficticio –que esconde el poder del más fuerte– en el sujeto Político de nuestro tiempo. Sociedad y Estado componen el esquema clásico del Estado Moderno, tanto liberal cuanto absolutista.

Para nuestro análisis, importa señalar el significado que tal hecho representa. Con él se ha producido el *DESPLAZAMIENTO DEL PODER POLÍTICO DEL INDIVIDUO Y DEL PUEBLO AL NUEVO ENTE POLÍTICO: EL ESTADO*. La comunidad desapoderada se transforma en sociedad pensada como ámbito legítimo del juego de los intereses privados, librados a su propio dinamismo. El individuo, cedida su libertad política, ya sea total o parcial, resulta también desapoderado. El Estado asume el poder y con él la conducción de lo común de modo autónomo. La democracia abstracta no constituye una excepción; ejercida como forma de gobierno se inserta en el esquema del Estado formal, volviéndose ella misma formal. Se incorpora a un sistema cerrado de comprensión de lo político que pasa por sistemas jurídicos también cerrados y coactivos ejercitando el gobierno como poder violento. El sistema de división de los poderes aunque ideado como control y dique de contención a los excesos de poder, no puede cumplir su cometido desde un mundo formal que sólo se controla a sí mismo. Conceptualmente concentra las tres formas clásicas de gobierno. La vida práctica demuestra que es fácilmente alterable el equilibrio que garantizan de modo teórico. Van degenerando según las circunstancias históricas en cualquiera de las formas impuras previstas, produciendo notable número de combinatorias y mixturas para sortear sus limitaciones. Ello es posible por el alto grado de arbitrariedad con que se manejan. Lo acotado por el profesor Héctor Muzopappa en “Los presupuestos para una reforma constitucional”, publicado en *Actores e Instituciones* (Legasa, 1989, p. 100) ayuda nuestra reflexión cuando dice “...el pensamiento moderno remontándose a la tradición romana configuró un nuevo esquema de gobierno que reunió en un sólo cuerpo las tres formas tradicionales de dominación: la monarquía en el ejecutivo; la aristocracia en el Senado o en la administración de Justicia, la democrática en el Parlamento...”

Entendemos que la concepción del Estado tiene vinculación inmediata con el alcance de la intervención política de sus integrantes. Formas reales o ficticias de participación dan vida a un sujeto político reconocido o alienado.

Cierta clase de Estados, por el carácter del poder político que concentran, llevan en sí la negación de toda clase de democracia; otros, al incorporarla de modo abstracto, desnaturalizan una participación libre, justa e igualitaria, base del sistema.

Este análisis propone pensar la relación individuo-comunidad y su vinculación con la figura sociedad-Estado, desde la realización práctica de la libertad. La experiencia moderna inaugura un sistema de vida aún vigente y se caracteriza por la insatisfacción de sus propósitos iniciales. El individuo, que había alcanzado la fuerza del concepto de Persona, ligada por definición al prójimo como proyección del amor de sí, al ser interpretado como individualidad autosuficiente vive lo social desde ese egoísmo como algo que se le opone. La comunidad, entendida como sociedad contractual, es suma de individualidades que se relacionan como inter-subjetividades egocéntricas y pierde la fuerza del nosotros; vive en tensión permanente como mera agregación insustancial de individualidades que luchan por sus intereses privados. La satisfacción de lo social, que ha perdido la categoría de sujeto, queda en manos de este nuevo ente Estado, que al detentar el ejercicio omnímodo del poder político decide desde sí qué es lo social a proteger. Esta desintegración de lo social es lo que provoca el nacimiento de la proclama por los derechos sociales como necesaria conquista de época: justicia social, derechos humanos, derechos sociales son reivindicaciones planteadas como frentes de lucha, producto de las privaciones que este tipo de Estado realiza en ese campo. Construido sobre una negación quedan despolitizados individuo y sociedad, actuando en el desamparo de una libertad sin contenidos. Ambos son absorbidos por este tercero-Estado que coacciona un sentido de la conducta determinado por su arbitrio. Este arbitrio no es contrarrestado por la vigencia del derecho a elegir quienes ejercen el poder político; antes bien lo afirma. Sin poder vinculante, el elegido se independiza del mandato recibido. Al hacerlo su acción no está sometida a control; la ejerce según

designios atados a las presiones de turno. Desempeña un mandato arbitrario que por tanto deja de ser mandato.

Nuestro enfoque afirma la necesidad del ejercicio de una libertad individual y social dando vida a un Estado que sea el mismo sujeto político democráticamente realizado. Cuando el poder político es enlace de voluntades referenciadas éticamente, el Estado es organización intitucional de la comunidad histórica, en el sentido de Ricoeur. Se vuelve necesario erradicar las ficciones y las polarizaciones irreductibles de los elementos integradores.

Una comprensión desapasionada nos hace ver que la experiencia histórica de los pueblos, lentamente y con luchas milenarias, lleva hacia el ejercicio de la acción participativa y la disminución de la arbitrariedad del poder político autoritario. La historia puede ser descifrada como un camino de metamorfosis sucesivas para alcanzar la fuerza de un yo y un nosotros. Ese camino nos conduce desde la negación de la esclavitud –aún cuando se sostenga su permanencia bajo otras formas– hacia el reconocimiento de los derechos de los individuos y los pueblos, para alcanzar sus autodeterminaciones respectivas, aunque hoy tengan dimensión parcial.

La historia da signos concretos de que en el hombre y los pueblos el camino hacia la libertad es una determinante ontológica. La humanidad ha ido trazando un camino de libertad de sentido o modalidad diferente, ya sea trágica, de pertenencia y perfección, moderna, abierta o cerrada, etc. (Ver de la autora "Libertad y Religión", *Revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales*, n° 13). En su versión actual alcanza las determinaciones de una libertad abstracta con bolsones de reconocimientos parciales en ámbitos específicos. Creemos que tal camino no se detiene. Continuarlo en un sentido cada vez más profundo nos lleva hacia una libertad real. Su concreción necesita intentar lo político sobre la base de un acuerdo ético. Hoy día el individuo no se siente actuando políticamente libre y con los alcances positivos de una facultad decisoria; las comunidades, como sujetos culturales sin poder político, sienten la misma insuficiencia y el letargo

que produce su marginación. Se asocia lo político con un obrar oscuro que no se detiene hasta alcanzar el poder.

Todo análisis filosófico político debe afrontar el discurso relativo al concepto de hombre, de comunidad y de Estado, cuando la experiencia encuentra amenazada la integridad de lo humano.

La desvinculación de las instituciones políticas modernas del mundo moral y ético hace afrontar a la humanidad gravísimas e irreparables consecuencias sostenidas en un individualismo atomizante y la concentración de un poder coactivo y arbitrario sin otro control que la fuerza. El Estado moderno pertenece al mundo legal antes que al ético; lo desoye al oponérsele. Como sujeto político coactivo, no se plantea actos morales sino legales. Esta afirmación, que quiere justificar la defensa de lo individual frente a la posible intromisión del poder coactivo en las decisiones personales, se vuelve de alto riesgo, atacando aquello que dice defender. No toma en cuenta los efectos viciosos que produce tanto en el individuo cuanto en el propio Estado; conduce a la posibilidad del ejercicio inmoral del poder público y la justificación de inmoralidades en el campo individual público o privado.

Nuestro planteo sitúa la cuestión en términos de crisis estructural. En su raíz, a nuestro juicio, está el indebido ejercicio del poder político monopolizado por este Estado Moderno que emerge como tercero abstracto cortando los lazos con la interioridad ética de la comunidad.

Aunque el Estado moderno quiera ser interpretado como posibilidad máxima de la experiencia política, no podemos dejar de advertir que se trata sólo de un modo particular de lo político que responde a determinaciones históricas dadas en un tiempo y espacio concretos, lo cual nos obliga a entenderlo en su contingencia. No es la experiencia de una historia acabada.

Desde el ejercicio de una libertad individual política con sentido ético, es posible recuperar el papel protagónico en la toma de decisiones que representan

el querer político común. Dentro de él, el Estado es figura histórica integradora, en tanto actúe como sujeto político no excluyente que comprenda dentro de sí la totalidad de los componentes. El Estado transformado en órgano de decisión desvinculado de quienes lo conforman, pierde el sentido de la eticidad. Allí queda abierto el camino para detentar un poder arbitrario. El poder legitimado exige una línea ascendente de formación: desde el reconocimiento de la libertad político-ética en la persona, hasta su despliegue máximo, como comunidad que adviene a Estado, con las mediaciones vinculantes que exige toda experiencia institucional real. El poder de los órganos que concreten el actuar del sujeto político, no puede expresar sino la capacidad decisoria solidaria de una interioridad que se expresa como espíritu colectivo. A través de ellos –los órganos– concreta sus obras. Las mediaciones representativas no pueden actuar como algo autónomo subsistente por sí, más allá de la voluntad común. En este contexto emerge la crisis de Autoridad, Representatividad y violencia. La falta de reconocimiento del espíritu común a la hora de las decisiones fundamentales, lleva a la pregunta por la legitimidad del sujeto que asume el poder y por la necesaria articulación de una experiencia política de partes conexas, dando sentido a la relación individuo comunidad.

Dejamos esbozado un plan de trabajo que requiere analizar el Estado Moderno como sujeto político nacido de la escisión de la libertad; reflexionar acerca de los aspectos desestabilizadores o inconvenientes que traen aparejadas las crisis de sus elementos internos; considerar los desvíos históricos producidos y la necesidad de que nuevas figuras interpreten las exigencias de nuestra época.

Creemos que el sujeto político se construye históricamente como comunidad organizada. Significa que los sistemas ideales, entendidos como modelos de aplicación arquetípica más allá de la vocación colectiva, no hacen sino trastocar un sentido. En cada caso, lo político y lo institucional deben asumir el carácter propio que corresponde al genio cultural que los informa y, al hacerlo, se ponen al abrigo de su disolución como sujeto cultural, peligro emergente de la homogeneización planetaria que universaliza figuras desde la abstracción y distorsiona el sentido de lo político como comunicación ontológica.

Es necesario no perder de vista el hecho de que acotar la noción de Estado Moderno implica acotar al mismo tiempo la noción de Derecho Moderno que lo conforma y sobre el que se sostiene. El concepto de lo jurídico y su fundamento operan en el concepto de Estado y su fundamentación. Por ello nuestro trabajo es pensado en el ámbito de la libertad, la ley y el Estado, en coherencia intrínseca. Desde las categorías que sostienen el Estado Moderno, vinculadas con el ejercicio de la libertad que generan o permiten, nos será posible apuntar los elementos que entran en crisis: autoridad, representatividad, violencia, participación, fundamentación, para concluir dejando un camino que abra a un concepto renovado de Estado comprendido como comunidad organizada ética. Así nos parece expresión política suprema.

Desde América el tema del Estado pasa por una doble exigencia: además de las consideraciones centrales sobre el Estado moderno, requiere analizar su experiencia histórica de desarraigo, ocasionando en el sujeto político lo que en otro trabajo llamamos Fractura Ontológica. (Ver de la autora *Perspectivas ético jurídicas. Una lectura americana*, Abeledo Perrot). Con ello podemos entender qué significó para América su institucionalización dentro de categorías modernas impuestas sin atender a su producción en libertad.

II. Categorías centrales del Estado Moderno: Fuerza legitimada y poder coactivo

Las categorías salientes del Estado Moderno nos revelan los alcances de la experiencia del sujeto político contemporáneo, que presenta signos inequívocos de inseguridad, inestabilidad y violencia, a partir de una creciente negación de la libertad y la justicia. Los mismos caracteres de constitución preanuncian su crisis.

La dicotomía central se configura dentro del sujeto político en la oposición demos-Estado. La experiencia política vive teóricamente la convicción de que es al Pueblo a quien corresponde ejercer legítimamente el poder decisorio como sujeto político originario que detenta dicha facultad por derecho propio. En él

el poder está legitimado de iure. Sin embargo, en la práctica vive la certeza de que el Estado, detentando un poder político coactivo, se transforma de hecho en el sujeto político concreto. Si uno detenta el poder de iure el otro lo hace de facto. Suelen establecer las Constituciones de los Estados modernos que los pueblos no deliberan ni gobiernan sino a través de sus representantes; queda así institucionalizada la distancia. La crisis emerge ante el desencuentro entre la convicción y la certeza. En la dicotomía apuntada se enmarca la crisis central que pone en cuestión la fundamentación de lo político en general, incluidos los sistemas en vigor.

En términos especulativos, el Estado, como órgano natural y necesario de toda comunidad política, lleva a cabo la acción colectiva haciéndola real. Estado-demos necesitan entablar una relación de correspondencias que hoy es vivida en franca tensión. Se le impone llevar a la práctica el querer de la comunidad política porque él mismo es ese querer que busca realizarse. Sin embargo, la distorsión actual hace que el Estado asuma, como ente político separado, la representatividad de aquélla sin atender *NECESARIAMENTE* sus exigencias. Tomadas las decisiones colectivas sin ligarlas al querer común, Pueblo y Estado viven escindidos sin quedar ligados por el deseo colectivo. El actual detentador del poder, el Estado Moderno, auxiliado por la fuerza coactiva, se cierra y atiende su propio querer, que asume como del conjunto. Ello es así por la dimensión dada a la libertad política.

Nuestro punto de partida se ubica en el papel que juega la libertad en la constitución y marcha de los entes políticos. Esa dicotomía señalada entre demos-Estado se produce en el escenario donde la libertad juega el rol principal. Su reconocimiento o negación y el modo como se concreta su ejercicio está en relación directa con el concepto de Estado y la conformación real del sujeto político, tal como queda definido en nuestro planteo general. Enlazamos el tema de la libertad con el papel del derecho y la justicia y la ingerencia de la moral y la ética en el sujeto surgido.

El momento moderno europeo produce el descenso de la fundamentación del mundo desde lo trascendente a lo inmanente, convalidándolo desde una Razón absoluta. Abandona lo teocéntrico y sostiene lo racional subsistente por sí. Con ello se transforma el concepto de libertad y desde ella el mundo práctico que objetiva. Otro es, como consecuencia, el papel de lo humano y lo social en la estructuración de los sistemas de vida.

Hemos caracterizado la libertad moderna en trabajos anteriores. (Ver cita en el *Planteo General*). Basta recordar que concebida como espontaneidad absoluta no tiene determinaciones exteriores a ella misma. Identificada con la Razón, constituye la condición de posibilidad de la experiencia y de la ley. Esta racionalidad libre por definición es atributo de seres racionales. El hombre la detenta como ser racional, con las particularidades de su humanidad y realiza su experiencia según los dictados de aquélla. Reparar en este aspecto nos parece capital: la racionalidad propia de seres racionales, transhumanos, está determinando el ejercicio de una acción humana que va a ser aceptable o calificada como “racional” en la medida que compatibilice con aquélla. Importa la distinción porque permite entender como se produce la marginación del hombre en cuanto tal, sustituido por esta Razón que, desde su causalidad, se instala fundamentadora y constructora del mundo. Lo humano queda integrado a la legalidad con que ella opera y es concebido tratando de que abandone lo propiamente humano que lo degrada (pasiones, sentimientos, etc.) para llegar a ser más que humano.

Esa libertad es un concepto cerrado que encuentra los límites sólo dentro de ella. Por lo tanto da sentido a un hombre autosuficiente, autolegisador, autónomo, que tampoco necesita más que de sí mismo. El concepto de lo cerrado autosuficiente es constante en la categorización general. Este tipo de libertad resulta irrealizable en el mundo humano donde otros y también racionales detentan la misma libertad. Es dividida en libertad interna y externa con lo cual se perfecciona la negación del yo que se proyecta políticamente. La cesión que el individuo hace de su libertad externa a favor del Estado para crearlo produce tal negación. El yo y el nosotros político cedido es ocupado por el Estado Moderno.

Se verifica un cambio fundamental en el ejercicio de la vocación política, que significa trocar una ontología. Esta vocación cumple en el hombre el llamado a trascenderse en dimensión universal. Realizarse en plenitud implica cumplir su ser como *zoon politikon*. Resultando parcializante y negadora toda experiencia que no dé cuenta de esta facultad irrenunciable, es entendida como violación del ser.

Este tipo de libertad cerrada, por su concepto, define un hombre como egoísmo inevitable llevándolo a ver en el otro un límite y no una compañía. Su egoísmo incontrollable hace que necesite de un tercero ajeno para vigilar su relación con los otros. Distorsiona así su vocación social y con ella la política. Produce el repliegue de su facultad de trascender, destacando lo antisocial y violento que hay en él como partes innegables de su naturaleza. Nuestra afirmación es que “obligado” a ceder “voluntariamente” la libertad externa, queda amputada su vocación política, y nace de ese modo un Estado policial y coactivo. La argumentación no cambia si la cesión de la libertad es total o parcial. Sin perjuicio de lo acontecido creemos que las cuestiones que atañen a la libertad no se manejan por idealizaciones a priori o elaboraciones ficticias. La libertad opera en el hombre más allá de condicionamientos que no son sino episodios históricos superables.

Cuando el mundo moderno instala el fundamento de lo político en el pueblo, reconociendo la magnitud de la democracia, produce un acontecimiento revolucionario. Los principios iniciales de afianzamiento del hombre y la consagración de sus derechos en leyes escritas inviolables, con controles públicos del poder bajo cuyo amparo se garantiza el ejercicio de las libertades individuales, constituyen un avance en el camino que señalamos como necesariamente inclinado a alcanzar la libertad. Cuando tal reconocimiento sólo adquiere un nivel abstracto, con base en un desapoderamiento arbitrario, no produce los efectos deseados y genera los de signo contrario.

El Estado Moderno se identifica con el poder coactivo y lo político se transforma en mera lucha despiadada y sin tregua para detentarlo. Ello es así

porque el desplazamiento del poder que anunciamos al comienzo origina su ejercicio desde el autoritarismo aún en las democracias más representativas, es decir, con mayor grado de autolimitación. Con las determinaciones de arbitrario, coactivo e ilimitado el poder se define como espúreo. Sin fundamentación legitimante obra, por la naturaleza de su origen, de modo arbitrario. Identificado con la fuerza, carece de límites pues no tiene más control que sí mismo. Al respecto el Dr. Mario Casalla nos recuerda en su libro *Tecnología y Pobreza* (Fraterna, 1988, p. 56) como “de aquí en más el poder –sobre cuya concepción y ejercicio se organiza una cultura– deja de estar subordinado a otra cosa que sus propias necesidades. Caídas, en un comienzo, las ‘ataduras religiosas’ (laicización absoluta) romperá muy pronto las barreras espacio-temporales (imposición planetaria) y buscará en sí mismo el fundamento y la medida de su accionar”.

Maquiavelo descarna y justifica el acceso a este tipo de poder que termina dividiendo al propio Estado en poder y gobierno como dos instancias que no necesariamente tienen que coincidir. Muchas veces se instalan en sujetos diferenciados ejerciendo unos la astucia coactiva y los otros la astucia política. No cambia el carácter de coacción ejercido sobre el sujeto pasivo: la comunidad y sus integrantes. Presentamos su ejercicio como juego astuto. Al respecto, Cassirer (o. c., p. 160) nos recuerda como fue Maquiavelo quien “anticipó en su pensamiento el curso entero de la futura vida de Europa”.

Alcanzar ese poder significa alcanzar el dominio de los resortes del Estado y con ello la capacidad de decisión que obliga a la comunidad entera. Concentrado en un titular de vocaciones políticas ficticiamente cedidas, se autonomiza y se vuelve arbitrario. Medios, métodos, objetivos son variantes de un juego que es autocontrolado. Ni el hombre ni el pueblo gobiernan. Lo hace un sistema abstracto de detentadores del poder.

Al acotar el tema de la libertad nos introducimos también en un aspecto conflictivo de la misma que tiene que ver con el papel de lo ético-moral en el Estado Moderno. Según lo hemos planteado, la cuestión pasa centralmente

por la división de la libertad. Se asigna la libertad externa al Estado como legalidad, enfrentada a la libertad interna como moralidad, que es resorte del individuo. Importa precisar cómo asume el Estado la determinación de lo justo y de lo bueno; desde donde quedan legitimadas las obligaciones individuales y colectivas y las responsabilidades que se vinculan al bien común.

La acción del Estado Moderno se define desprendida del mundo ético-moral. La desvinculación nace al abrigo de la fundamentación y caracteres de este Estado. No se trata de interpretaciones subjetivas sino de determinaciones propias a su esencia relativas al modo de estructurar la libertad. Si el mundo moral se circunscribe a lo individual y ambos se desconectan entre sí, el Estado sólo se plantea problemas legales. Siendo sus leyes coactivas, no puede invadir lo reservado a la individualidad. Cassirer al señalar que la moral vale para la voluntad individual agrega que "al Estado le interesa la verdad y la verdad reside en el poder" (*Mito del Estado*, p. 313).

Por ello, Estado, poder y política están signados por un autismo inevitable. El autor que acabamos de citar lo expresa diciendo: "...el mundo político ha perdido su conexión no sólo con la religión o la metafísica sino también con todas las demás formas de la vida ética y cultural del hombre. Se encuentra sólo en un espacio vacío" (o.c., p. 166).

El Estado Moderno no tiene como objetivo acompañar a lo humano en lo bueno, sino hacer que los pactos se cumplan (Hobbes, Locke). Tampoco se hace eco de la justicia o de hombres justos: sólo le interesa que se cumpla la ley justa o injusta. La justicia como poder del Estado tiene carácter formal: adecuación de un hecho con la ley. Los jueces no debaten contenidos justos o injustos de las leyes ni pueden entrar a considerarlos. Estado, poder, ley, desvinculados de todo control político y ético moral, se vuelven arbitrarios e incontrolables. Ya hemos visto como sólo se limitan a sí mismos y pueden alterar sus propios límites, en tanto detentan poderes de coacción efectiva.

Dijimos que el derecho coactivo es consustancial a este tipo de Estado. La ley, al ser concebida como técnica de control social, no atiende a la justicia. Su objetivo es evitar el desorden. Se desinteresa de la justicia sustancial y sólo atiende a lo formal. Al igual que el Estado, como instrumento organizador del mismo, el derecho está desprendido de interferencias morales, pues los límites acerca de lo bueno son de índole individual. Y ello es así porque no resulta admisible, ni en lo teórico ni en lo práctico, el avasallamiento de la esfera privada por un actor coactivo de cualquier naturaleza que sea, incluido por supuesto, el tipo de Estado que estamos considerando. Por ello se vuelve imperiosa su revisión. Las referencias generales de los institutos jurídicos acerca de que las leyes no pueden alterar la moral y las buenas costumbres implican –aún en el contexto más desmoralizante– que la moral es el marco del derecho sin que se dé el sentido inverso. Con ello se afirma nuestra interpretación en el sentido de que lo ético moral se impone como horizonte omnicomprensivo del obrar, referente ineludible de lo jurídico, aunque éste quiera autonomizarse de lo bueno y lo justo. En tanto lo moral se cierre en autonomías individuales no referenciadas se disuelve su efectividad. Desaparecen la moral y el derecho.

Atendemos al despliegue de una libertad que busca definirse políticamente como voluntad realizada. Cuando la voluntad política del individuo sólo se realiza como sufragio electoral regular u ocasional o como presión que resiste un actuar autoritario que lo desconoce, el sujeto político real vive fracturado y desestructurado.

Hemos dicho que al revelárse nos el ejercicio de la libertad del ciudadano, se nos revela el tipo de Estado y con él la configuración del sujeto político representante activo de la voluntad política común. Hicimos el camino reflexivo de confirmación de nuestra tesis y el señalamiento de la crisis emergente. El reconocimiento de una libertad formal produce un estado policial. Una libertad política denegada o disfrazada origina un Estado coactivo. Cuando el propio Estado autolimita el ejercicio de su fuerza aparece un Estado de Derecho, que pasa a ser el logro máximo de nuestro tiempo. A pesar de ello, no deja de ser policial y coactivo. El principio que surge de este análisis es que a mayor grado

de participación, menor grado de poder coactivo. La participación que permite el Estado moderno tiene grados y niveles en las diferentes realidades, pero ninguna salva los reparos formulados.

Desde Maquiavelo hasta Max Weber la definición del Estado Moderno incluye la fuerza como el elemento específico que hace a su esencia, única posibilidad de orden social. Ella preside la acción de gobierno y es el parámetro de las relaciones sociales. Las acciones privadas frente al conflicto pasan también por una definición coactiva. Suecia ofrece ejemplos de apertura hacia la comprensión de conductas apelando a otras instancias que median y atemperan la crudeza coactiva del Estado Moderno. Occidente hace gala de este tipo de Estado nacido con el signo distintivo de la violencia. Para Maquiavelo, la creación de este nuevo sujeto político tiene que ser realizada por la fuerza y detentándola. Las citas que pasamos a reseñar ilustran este sentido.

N. Bobbio reproduce la definición de Treitschke "la fuerza es el principio del Estado, como la fe el de la Iglesia como el amor el de la familia" (*Historia de la Filosofía*, Debate p. 264). Para M. Weber el Estado Moderno "sólo es definible sociológicamente por referencia a un medio específico que él, como toda asociación política posee: la violencia física." "Todo Estado está fundado en la violencia" dijo Trotsky en Brest-Litowsk. Objetivamente esto es cierto. Si solamente existieran configuraciones sociales que ignoras en el medio de la violencia, habría desaparecido el concepto de "Estado" y se habría instaurado lo que, en este sentido específico, llamaríamos "anarquía". La violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el único de que el Estado se vale, pero sí SU medio específico. Hoy, precisamente, es especialmente íntima la relación del Estado con la violencia" (*El político y el científico*, Alianza, p. 83.) Consecuentemente, "el Estado, como todas las asociaciones políticas que históricamente lo han precedido, es una relación de DOMINACIÓN de hombres sobre hombres que se sostiene por medio de la violencia legítima..." (o. c., p. 84). (La bastardilla corresponden a texto destacado por el autor en el original.)

La opinión general de los autores destaca los elementos que hemos venido señalando, más allá de la valoración que pueda ser hecha sobre el Estado considerado en sí mismo. Constituyen el punto de apoyo de nuestra argumentación.

La cita de Weber plantea opciones fuertes e irreductibles:
estado coactivo o anarquía;
sin violencia no hay Estado;
fuerza como su medio específico;
Estado como relación de dominio de hombres contra hombres.

Tales afirmaciones, al menos, dan que pensar. Desde nuestro punto de vista, se trata de opciones que no son tales; se entablan dentro de una misma concepción de carácter cerrado y se presentan como única alternativa, con lo cual se constituyen en una falacia. Objetamos que esta figura histórica sea la excluyente.

Frente a la fuerza queremos legitimar la justicia; no aquella utópica e irrealizable que plantea Kelsen como inexistente e imposible sino la virtuosa, aquella que se va determinando éticamente por el consenso participativo y el trabajo común instalada como hábito antes que como concepto a priori.

Cuando Weber afirma que el Estado es una relación de dominación entre hombres sostenido por la violencia legítima, dice una verdad. Parece innecesario aclarar que ello preside la experiencia del Estado Moderno. Lo venimos señalando como su determinación propia y manifestamos nuestra oposición a que ese sea el tipo de estructuración de la relación humana. Aunque la historia sea una galería de asociaciones dominadoras y expoliadoras, no queda justificada su existencia. También ha sido escenario de Imperios que han caído, y de esclavos liberados.

Transcribimos la siguiente opinión de Bobbio sobre Weber que nos acerca a ambos y enmarca nuestra tesis: "Los rasgos característicos de la concepción realista de la política son claramente visibles en su obra (la de Weber). Señalo

algunos de ellos: la esfera de la política es la esfera donde se desarrollan las relaciones de poder y de dominación, relaciones marcadas por la lucha incesante entre individuos, grupos, clases, razas, nacionalidades y cuyo envite siempre es el poder en la doble forma de poder de hecho y poder legítimo; b) la lucha es incesante porque para ella no existe ninguna catarsis definitiva en la historia; c) las reglas de la acción política no son ni pueden ser las reglas de la moral, por lo que la acción del político no puede ser juzgada con criterio moralista en base a principios preestablecidos sino sólo en base al resultado." (Bobbio o. c., p. 259.) No menos realistas suenan estas palabras de Bobbio: "No hay duda de que de este modo Weber esboza el tipo ideal del estado liberal burgués; liberal en el sentido de que la justicia formal y racional opera como 'garantía de la libertad' y 'burgués' en el sentido de que la libertad que el derecho formal y racional garantiza es la libertad económica" (o. c., p. 282.)

También es necesario recordar la opinión de Kelsen sobre el tema: "el Estado es el orden jurídico al que se le atribuye el uso exclusivo del poder coactivo para la ejecución de las normas". Este autor agrega que "si junto al poder coactivo en todo grupo humano hay poder ideológico y económico el monopolio de la fuerza o el uso exclusivo del poder coactivo es condición necesaria de la existencia del Estado" (o. c., p. 261).

La afirmación de Bobbio en el sentido de que "la desmonopolización del poder coactivo representa pura y simplemente la vuelta al estado hobbesiano: guerra de todos contra todos", significa que ha angostado su capacidad de propuesta; no se ha hecho cargo de la necesidad de un nuevo fundamento que ampare otra concepción del Estado y del hombre para reformular la experiencia de lo político aun manteniendo el monopolio de la fuerza coactiva. El argumento esgrimido desvirtúa lo político; no ofrece una reflexión abierta a otras posibilidades. En un mundo enfermo de realismo acrítico, la afirmación suena como lógicamente aceptable. A poco que se desenmarañen sus implicancias en profundidad, se presenta totalitario y devastador. Al igual que Weber la disyuntiva parece ser o el egoísmo controlado por la violencia o la anarquía y la

guerra. Nos preguntamos por el tipo de hombre, de sociedad y de mundo que tal afirmación supone. No es posible desandar la historia pero es viable fijar caminos de corrección cuando se muestran desajustes que conducen a negaciones sustanciales desnaturalizantes del sentido del hombre.

Una solución recuperadora de lo político leído en los crudos términos que se dejan transcritos exige liberarse de los fundamentos que le dieron tal significación. Si sostenemos la necesidad de un Estado para detener la guerra de todos contra todos, se supone un tipo de hombre definido a priori arbitrariamente; ello no va más allá de una petición de principios. Si se apela a la cesión ficticia de una libertad externa –que a su vez es obra de otra ficción–, a la justificación de la violencia como remedio insoslayable, a la existencia de un derecho coactivo para alcanzar un orden superficial, a la ley como producto autoritario alejado del consenso social, el Estado no puede ser sino policial y se transforma la política, como el poder, en juego astuto; se separan de la ética y su finalidad se transforma, en un ciego propósito que se impone detentar el poder por el poder mismo. Un Estado abstracto como el moderno resulta ineficaz por definición para aplicar un ideal de justicia. Este tipo de Estado Moderno es incompatible con la justicia y la ética; en general, con la virtud. Lo expresa Weber con precisión y retomamos el hilo del pensamiento apelando al contrario sensu “quien quiera imponer sobre la tierra la justicia absoluta, valiéndose del poder necesita para ello seguidores, un ‘aparato’ humano. Para que éste funcione tiene que ponerle ante los ojos los necesarios premios internos y externos.” “El séquito triunfante de un caudillo ideológico suele así transformarse con especial facilidad en un grupo completamente ordinario de prebendas” y agrega: “Repito que quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan en torno al poder.” (Weber o. c., p. 171/3.)

Seguimos a Weber en su argumentación. Significa querer alcanzar justicia a través de medios impuros. La propuesta parte de una inconsistencia en la base. No es posible a nuestro juicio lograr justicia con instrumentos injustos por nacimiento y naturaleza. Un cambio real exige modificar el punto de

partida superando vicios de origen para lograr efectos diferenciadores reales que correspondan a la cosmovisión que los sustenta. No se puede llegar a lo bueno apelando a medios aberrantes. Tampoco se puede querer ser bueno bajo coacción.

Es pensable una sociedad organizada por leyes que expresen su ser y al hacerlo la realicen en su identidad; esto significa el reconocimiento del ejercicio de las libertades políticas de sus integrantes. No existe libertad sin normas, pero la cuestión central pasa por el reconocimiento de la libertad en el sujeto que las crea y el criterio de justicia que las legitima. Las normas son objetivación de la libertad; desconocida ésta se vuelven normas coactivas que no resultan legitimadas en su génesis.

Nuestra propuesta exige un nuevo desplazamiento del poder político recuperado por su detentador originario: el demos de la democracia real. El fundamento de lo político necesita ser reformulado abandonando la subjetividad racionalista absolutizada. Como señalamos al comienzo, la tarea implica acciones de conjunto instaladas en un sujeto político que actúe como comunidad organizada a partir de un contexto ético. Significa diseñar un camino en el cual la ética culmine en la política. Instalados en un sujeto originario y sosteniendo el fundamento ético del poder político operan resortes de control intrínsecos invulnerables que impiden el crecimiento de un Leviathan.

En sentido contrario a lo expuesto tanto por Bobbio cuanto Weber nos parece que la experiencia contemporánea es la que tiene que ser leída como anarquía estructurada. Esta aparece cuando no hay gobierno constituido y entrañablemente unido a la voluntad política común; cuando se actúa como sujeto político insustancial; cuando se encubre un tramado ético sin Autoridad que conduzca al grupo hacia su destino de realización.

Pertenecer a un grupo social, ser de él en términos de pertenencia, exige participar políticamente de modo decisivo. Lo político integra voluntades

individuales que no se autoabastecen sino que se realizan haciendo efectiva su vocación de universalidad; alcanzan así el nivel de decisión como polis. Está presente el sentido del yo y el nosotros accediendo a lo institucional. Esta relación vista desde lo ético-histórico supera la subjetividad del yo y se desarrolla en la intercomunicación tal como lo plantea el prof. J. C. Scannone S. J. en *Nuevo punto de partida de la Filosofía latinoamericana* (Guadalupe, p. 115): "Pues el nosotros no es la universalización del 'yo' ni la 'intersubjetividad trascendental' de la relación sujeto-objeto sino que está constituido por la interrelación (sin mutua relativización) entre 'yo' 'tú' y los ilimitados 'él' en el seno de una comunidad ética histórica aunque, por supuesto, implica también el 'ello' como referente de su intercomunicación presupuesto de su interacción y eventual materia de su intercomunidad." "El nosotros que hace posible la dimensión política exige 'la irreductible alteridad ética del otro' según nuestro autor. Nos recuerda asimismo que 'la relación ética entre cosujetos no es de dominación heterónoma ni de mero respeto del recíproco derecho, sino de mutua acogida ética y responsabilidad por el otro en cuanto otro.'" (o. c., p. 138.)

La participación activa no quiere decir homogeneización; implica la acción en el disenso con la riqueza de lo plural; éste forma parte necesaria del conjunto y le da vitalidad, constituye su motor de crecimiento.

Creemos que no se alcanzan los valores de estabilidad sino a partir del momento en que cada particularidad asuma su rol creador y los pueblos sean conducidos desde sus propias creaciones. Nos parece insoslayable un análisis crítico sobre los derechos sustanciales negados, en orden a una organización política sana.

La experiencia moderna nace avanzando en el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano. Torció un sentido; constituye una etapa que dio sus frutos y necesita revisar sus vicios.

La crisis que viven los sujetos políticos de nuestro tiempo, encarnados en la concepción de Estados modernos, necesita debatir temas que se presentan decisivos. Así por ejemplo los que pasamos a señalar:

1. Fundamentación del sujeto político y del Estado.
2. Autoridad y poder político.
3. Representatividad y mandato no vinculante.
4. Violencia y justicia formal.
5. Participación en el sistema político.

En todos ellos se hace necesario recabar la experiencia de libertad que los avala y sobre la que se instalan, dando sentido a un modo determinado del ejercicio del poder.

Los temas enunciados constituyen figuras claves de lo político. El Estado Moderno representa un estado de insatisfacción: obliga antes que protege; impera antes que reconoce. Si la Autoridad no es asumida como vocación de servicio y el representante se desliga de su mandato, si el obrar tiene que ver antes con la sanción que con la justicia, la enfermedad de lo político impide un crecimiento genuino.